

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El dos (02) de agosto de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **OLGA LUCÍA ZAPATA FRANCO**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A.), tramitado bajo el radicado No. **05001-31-05-018-2020-00033-01**.

AUTO

De conformidad con el memorial que antecede, se acepta la renuncia que presenta el apoderado principal de la entidad demandada COLPENSIONES, Dr. FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, portador de la T.P. 198.214 del C. S. de la J.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata la actora que nació el 13 de julio de 1962, y se afilió al Sistema General de Pensiones en septiembre de 1995. Posteriormente se trasladó al RAIS por medio de la AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1998.

Expone que los asesores de PROTECCIÓN S.A. llegaron a la empresa donde trabajaba y le indicaron que en el fondo privado tenía mejores oportunidades para pensionarse y con más garantías, que se podía pensionar antes de la edad requerida por el ISS que, en caso de fallecer, la pensión le quedaría a sus hijos, que era oportuno hacer el traslado ya que el ISS dejaría de existir y por tal razón se quedaría sin pensión. Le explicaron que quedaría con una mesada pensional superior a la que le reconocería el ISS, pero nunca le informaron que al afiliarse al fondo privado disminuiría el monto de la mesada pensional, puesta esta estaría sujeta al reporte de lo ahorrado en su cuenta de ahorro individual, ni que su derecho a percibir una pensión estaría en riesgo, ni le suministraron información adecuada, suficiente, clara, comprensible y cierta en relación al traslado, pues no le informaron el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual para poder obtener una pensión anticipada, ni le realizaron estudio previo, individual y concreto aclarando las ventajas y desventajas que conllevaría permanecer o trasladarse de régimen.

Aduce que no recibió la reasesoría clara y completa antes de los 47 años de edad, por parte de PROTECCIÓN S.A., respecto de si voluntariamente quería permanecer en el RAIS o si deseaba trasladarse al RPM.

Arguye que, el 19 de noviembre de 2019, radicó ante COLPENSIONES reclamación administrativa, en la cual solicitó tener como ineficaz y/o nula su afiliación al RAIS, y que en consecuencia le fuese aceptado el traslado al RPM y posteriormente el reconocimiento de la pensión de vejez bajo los parámetros del RPM, a la cual dicha entidad respondió negativamente.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La *a quo* despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS, y condenando a COLPENSIONES a reconocer pensión de vejez a la demandante en los siguientes términos:

“PRIMERO. Se DECLARA LA INEFICACIA DEL TRASLADO efectuado por la señora OLGA LUCÍA ZAPATA FRANCO identificada con C.C. 43.065.944, a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN SA, como se dijo en las motivaciones.

SEGUNDO. SE ORDENA a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA, efectuar el traslado inmediato de todos los valores que hubiere recibido con motivo de su afiliación, como cotizaciones, bonos pensionales, con los rendimientos que se hubieren causado, sumas adicionales de la aseguradora y cuotas de administración, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, según se explicó en las consideraciones de la presente providencia.

TERCERO. SE ORDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, reactivar la afiliación de la parte actora, recibir las sumas indicadas y continuar como su administradora de pensiones, según se dijo en la parte motiva.

CUARTO. SE CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar la señora OLGA LUCÍA ZAPATA FRANCO, identificada con C.C. 43.065.944, la pensión de vejez, en aplicación de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones de la Ley 797 de 2003, según se dijo de manera antecedente.

QUINTO. SE CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar la señora OLGA LUCÍA ZAPATA FRANCO identificada con C.C. 43.065.944, la suma de \$36.876.391, a título de retroactivo pensional causado entre el 21 de julio de 2020 hasta el 30 de abril de 2022, a razón de 13 mesadas anuales a favor de la demandante. A partir del 1 de mayo de 2022, COLPENSIONES, deberá continuar pagando a la demandante en forma vitalicia la pensión de vejez la suma de \$1.660.613 a razón de 13 mesadas anuales, sin perjuicio de los aumentos anuales que el Gobierno Nacional determine para el efecto. Del pago del retroactivo mencionado se autoriza el descuento en salud a que haya lugar.

SEXTO. SE DECLARA IMPROBADA la de prescripción y las demás quedaron implícitamente resueltas como meras oposiciones.”

Para fulminar la condena, la *a quo* argumentó que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional y se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes pensionales, determinando e informando la conveniencia e inconveniencia de uno y otro régimen, y la inversión de la carga de la prueba de la información brindada en cabeza de la AFP.

Luego, señaló que en el proceso no se probó por parte de las AFP que, al momento de la afiliación de la demandante, haya cumplido con el deber legal de otorgar una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, resultando insuficiente como prueba de la existencia de un consentimiento suficientemente informado la suscripción del formulario de afiliación preimpreso, por lo que consideró que existe mérito para acceder a las pretensiones y declarar la ineficacia del traslado.

Frente a la pensión de vejez pretendida por la actora, se condenó a COLPENSIONES a reconocer y a pagarla a la actora, con fundamento en la Ley 100 de 1993 con las modificaciones de la Ley 797 de 2003, con el pago de la suma de \$36.876.391, a título de retroactivo pensional causado entre el 21 de julio de 2020 hasta el 30 de abril de 2022, a razón de 13 mesadas anuales, y a continuar pagando a partir del 1 de mayo de 2022, la pensión de vejez la suma de \$1.660.613, sin perjuicio de los aumentos anuales que el Gobierno Nacional determine para el efecto. Del pago del retroactivo mencionado se autorizó el descuento en salud a que haya lugar.

Finalmente resolvió las excepciones presentadas como meras oposiciones, ya que no fueron verdaderas excepciones las que propuso la demandada y condenó en costas a PROTECCIÓN S.A.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La anterior decisión fue apelada por el apoderado de la demandante, y de PROTECCIÓN S.A.

APELACIÓN DE LA DEMANDANTE.

El apoderado de la demandante apela la sentencia, solicitando condenar a COLPENSIONES al pago de las costas procesales, argumentando que el punto de partida para el análisis de las costas procesales es el desgaste procesal.

Aduce que hay que tener claro que las costas son procesales y no sustanciales y si bien el despacho tiene toda la razón, en el sentido de que había una limitante sustancial desde el punto de vista legal, había una situación de restricción legal, para que mi cliente fuera recibida por Colpensiones, también es cierto que, basta mirar la contestación de Colpensiones y los alegatos de conclusión para advertir que se resistió siempre la pretensión. En mi opinión respetando la del despacho, aquí lo que debía haber hecho Colpensiones para exonerarse de las costas era allanarse. Sin embargo, uno lo que denota no solo resiste la pretensión, sino que sigue pidiendo al despacho que niegue todas las peticiones, y acto seguido dice que si se ordena esa ineficacia que se beneficie con todas las devoluciones económicas en las que debe incurrir PROTECCIÓN. Por un lado, pide que no se conceda y por otro lado pide que si se concede se le devuelva todos los emolumentos económicos que ya ordenó el despacho. En todo caso es su señoría, lo que quiero anotar o precisar, es mi respetuoso apartamiento de su decisión es que efectivamente Colpensiones desgasta al despacho con la resistencia de la pretensión.

Alega que el despacho tiene que hacer los análisis en la presentación de argumentos de Colpensiones, cuando lo cierto es que ya la jurisprudencia en el tema, está muy claro y a lo que se debe someter Colpensiones es a las resultas del proceso. Máxime que el primer beneficiado, en la declaratoria de la ineficacia es el mismo Colpensiones.

Obsérvese usted que, si mi cliente hubiese permanecido todo este tiempo afiliado a Colpensiones, no había podido recibir la cantidad económica que hoy se le va a devolver.

En ese orden de ideas, resistirse a un aporte económico de esa magnitud cuando va a engrosar la cuenta de reparto común.

APELACIÓN DE PROTECCIÓN S.A.

La apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A., apela la sentencia, solicitando sea revocada parcialmente, en los puntos que se le condenó a trasladar a COLPENSIONES, los conceptos de cuotas de administración y de seguro provisional, exponiendo que condenar a PROTECCIÓN a trasladar las cuotas de administración y de seguro provisional sería en primer lugar, desconocer la excelente gestión que se realizó y esto se evidenció en los altos rendimientos.

En segundo lugar, desconocer el derecho a las restituciones mutuas consagradas en el art 1746 del Código Civil.

En tercer lugar, se generaría un enriquecimiento sin causa para COLPENSIONES, entidad que nunca administró la cuenta de ahorro individual de la demandante. También es importante resaltar que estos descuentos por cuotas de administración y de seguro provisional son realizados toda vez que, la Ley 100 de 1993 autoriza estos descuentos, los cuales se descuentan en igual proporción en el RPM. También estas cuotas de administración y seguro provisional tienen una naturaleza diferente a la de pensión. Por lo que podríamos hablar de prescripción parcial de estas cuotas.

Por otra parte, en cuanto al seguro provisional tal y como su nombre lo dice se trata de un seguro, el cual es pactado por una aseguradora, que mes a mes se le pagó para mantener vigente las pólizas que cubrieron a la demandante en caso de que se generara el siniestro, esto es invalidez o muerte.

Si bien en el presente caso no se generó el siniestro, esto no es razón alguna para desconocer el funcionamiento de los seguros ni mucho menos para afectar a un tercero de buena fe, que es la aseguradora, que ni siquiera está vinculada al presente proceso. Por lo anterior entonces, le ruego al Tribunal revoque parcialmente la sentencia en estos dos puntos.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, la apoderada judicial de la parte demandada, COLPENSIONES allegó escrito de alegación en el que anota resumidamente, que es oportuno hacer mención al art. 13 de la Ley 100 de 1993, que

aseguró la libertad en escogencia de régimen pensional, por su parte el Decreto 663 de 1993 el cual aplica como regulación para las Administradoras de Fondos de Pensiones, toda vez que hacen parte del sistema como instituciones financieras privadas de carácter previsional encargadas de administrar eficientemente los fondos y planes de pensión del régimen de ahorro individual con solidaridad y de los fondos de cesantías en Colombia; estableció en el Art. 97 la importancia del deber de informar al consumidor financiero, adicionalmente el decreto 692 de 1994, en su artículo 5 establece que las personas que cumplan los requisitos para seleccionar el régimen de ahorro individual con solidaridad no podrán ser rechazadas por las administradoras del mismo.

Solo para el 2014, con la expedición de la ley 1748, se establece la obligación de brindar información transparente a los consumidores de los servicios financieros y consecuentemente diferentes niveles de intensidad del deber de información según la legislación vigente.

Descendiendo al caso concreto las premisas normativas antes referidas, podemos indicar y consecuencialmente colegir, lo siguiente:

El traslado de régimen del afiliado (a) – demandante, y selección del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ocurrió el 4 DE SEPTIEMBRE de 1998, en vigencia del Decreto Ley 663 del 02 de abril de 1993, solo se exigía a las Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías, atender el formulario con el lleno de los requisitos que para los efectos preveía la entonces Superintendencia Bancaria, a fin de demostrar la aceptación y consentimiento por parte de aquel.

Imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible. Es claro que el entendimiento entre el RPM y el RAIS sugiere que los afiliados sean debidamente asesorados dado que hay aspectos técnicos que los diferencian. Sin embargo, esta regla no puede interpretarse como una situación universal que desplace las situaciones de cada caso particular y que además invierta la carga de la prueba sin mayor análisis que la naturaleza experta que tiene la administradora de pensiones. Este contexto tampoco puede desconocer escenarios donde la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad de la demandante y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario durante su vida laboral, le permitía escoger acertadamente el régimen pensional.

Podemos colegir sin lugar a equivoco que, en lo atinente a la carga de probar los supuestos de hecho narrados en el acápite fáctico del escrito de demanda, estos deben de estar a cargo de la demandante.

Adicional a lo anterior, se colige del interrogatorio de parte realizado a la OLGA LUCIA ZAPATA FRANCO, que nadie la obligó a efectuar su traslado al Régimen de ahorro individual, sino que el mismo lo realizó de manera voluntaria.

Ahora bien, en caso de que la decisión en esta instancia sea la de confirmar la sentencia emitida por la Juez 18 Laboral del Circuito, respetuosamente solicito a los señores magistrados indicar claramente en la sentencia que la AFP PROTECCIÓN S.A. traslade a Colpensiones, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la señora OLGA LUCIA ZAPATA FRANCO, tales como: (i)cotizaciones, (ii) bonos pensionales, (iii) sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, (iv) cuotas de administración y la indexación de las mismas, (v) el porcentaje de garantía de pensión mínima y (vi) el traslado de los reaseguros y seguros previsionales; tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1689 de 2019; SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, entre otras.

5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si la afiliación del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz, y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

De confirmarse la decisión de declaratoria de ineficacia antes referida, se verificará si es procedente la condena en contra de COLPENSIONES de reconocer y pagar la pensión de vejez a la demandante, y en caso afirmativo, los términos en que dicha prestación debe ser otorgada.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes.

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de PROTECCIÓN S. A. se consultará la sentencia en favor de

COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a las afiliadas o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)

2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente asunto, está probado, que la accionante, estando afiliada al régimen pensional de prima media administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, según historia laboral emitida por COLPENSIONES visible a folios 61 y 62 del documento 01 del expediente digital, se afilió a la administradora del RAIS PROTECCIÓN S.A. el 14 de septiembre del 1998, como se anota en el formulario de afiliación a dicho fondo que milita a folio 75 del documento 01 del expediente digital, **con efectividad a partir del 1º de noviembre del 1998**, como se registra en el certificado del SIAFP que milita a folio 101 del expediente (Documento 04 del expediente digital).

De otra parte, en este caso, si bien la demandante no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no contar para el 1º de abril de 1994 con 40 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que la AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1998 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS**.

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:19:08 del video de la audiencia de trámite y juzgamiento (Documento 17 del expediente digital), no se advierte que este haya confesado que PROTECCIÓN S.A. le hubiese brindado toda la información, completa, clara y oportuna que se requería para materializar su afiliación al RAIS, pues no manifiesta que se le haya ilustrado sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en

cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, contrario a lo argumentado por la apoderada de PROTECCIÓN S.A. en su recurso de alzada, para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción preimpresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probó la AFP, siendo su carga, como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión de la *a quo* de declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por la demandante en el año 1998 cuando se trasladó del RPM administrado en ese momento por el ISS hoy COLPENSIONES a la AFP PROTECCIÓN S.A.

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES, la orden impartida por la *a quo*, en principio se encuentra acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, sin embargo no existe la debida precisión de los dineros a transferir, pues la juez no hizo mención a la devolución del porcentaje del reaseguro de FOGAFIN, por lo que se precisa en esta instancia, que PROTECCIÓN S.A. debe devolver a COLPENSIONES la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro FOGAFIN y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole, pues contrario a lo manifestado por la apoderada de PROTECCIÓN S.A. en su recurso de alzada, al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este** y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido la AFP demandada como cotización de la demandante, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una*

disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás» (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”.*

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación dla actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuándo le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”

Asimismo, contrario a lo manifestado por la apoderada de PROTECCIÓN S.A. al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o de una buena gestión en la administración del bien, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de la AFP demandada, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, la que acarrea como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban asumir con su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las

sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

Respecto de la afirmación que realiza la apoderada de COLPENSIONES en sus alegatos sobre la imposibilidad legal de traslado de régimen, derivada de la restricción temporal impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modificó el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, cuando le falten al afiliado menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, es palmario que tal prohibición, se aplica en los casos de traslado voluntario, que no es lo que pretende la demandante, sino la ineficacia de su afiliación inicial al RAIS.

En lo que tiene que ver con la orden del *a quo*, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se pudiera haberse pagado a favor del actor, tal decisión resulta desacertada, toda vez que al ser ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será precisada. El importe de bono pensional distinto al tipo A, sí debe ser devuelto a COLPENSIONES.

Ahora, en lo concerniente a lo alegado por PROTECCIÓN S.A. en su apelación, en el sentido que está imposibilitada para solicitar una devolución de las primas de seguros y trasladársela a COLPENSIONES toda vez que la aseguradora es un tercero de buena fe que nada tuvo que ver con el contrato suscrito entre la parte demandante y ni siquiera está vinculada al presente proceso, se ha de manifestar que en la sentencia no se ha proferido orden de que alguna aseguradora deba efectuar devolución de las primas de seguros, por lo que el porcentaje de los seguros previsionales debe ser devuelto por esta AFP de su propio peculio.

De otra parte, en lo referente a las sumas que deben ser devueltas a COLPENSIONES, encuentra la Sala que, la orden impartida por la *a quo*, en principio se encuentra acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, sin embargo no existe la debida precisión de los dineros a transferir, pues la juez no hizo mención a la devolución del porcentaje del reaseguro de Fogafín, por lo que se precisa en esta instancia, que PROTECCIÓN S.A., debe devolver a Colpensiones la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de

los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole.

En cuanto a la solicitud de la apoderada de COLPENSIONES en los alegatos de esta instancia, en el sentido que se ordena la indexación de las cuotas de administración, esta Sala considera que es procedente, por cuanto este porcentaje de las cotizaciones no fue abonadas a la cuenta de ahorro pensional de la demandante, por lo que no devengó los rendimientos o intereses, pues es un porcentaje que fueron apropiados por PROTECCIÓN S.A. o gastados para los pagos de las primas de seguros y otros menesteres que indica la Ley, y por ello debe ser devuelto indexada, la cuota de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima

Al respecto la jurisprudencia de la CSJ de la que se citan las sentencias SL1688 de 2019 SL 2932 de 2020, SL 3202, 3571, 3706, 3707, 3708, 3709 y 3769 de 2021, la CSJ ha ordenó que las cuotas de administración fueran devueltas indexadas, por lo que le asiste razón a Colpensiones en este aspecto, de la apelación, por lo que se ordenará en esta instancia, que las referidas cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima sean devueltas indexadas.

Finalmente, en cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por COLPENSIONES al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

De otra parte, respecto de la prescripción de las cuotas de administración ella no opera, toda vez que la obligación de restituirlas estos se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de las sentencias que la declaran, por lo que no sería procedente la prescripción de las cuotas de administración.

DE LA CONDENA AL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ A LA DEMANDANTE, A CARGO DE COLPENSIONES.

En cuanto a la condena al reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de COLPENSIONES, aspecto que se revisa en consulta en favor de esta entidad, debe

señalarse primeramente que, habiéndose declarado la ineficacia del traslado de la accionante al RAIS, el derecho que tenga la a la prestación de vejez, debe ser asumido por COLPENSIONES, bajo los requisitos legales del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la ley 797 de 2003, por no ser esta beneficiaria de la transición del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como bien lo dejó establecido la falladora de primera instancia.

Aquellas normas legales exigen como requisitos para obtener la citada prestación, 57 años de edad en el caso de las mujeres y 1300 semanas cotizadas.

En este caso, la accionante, nació el 13 de julio de 1963, como se prueba con la copia de su cedula de ciudadanía que milita a folio 60 de la demanda (documento 01 del expediente digital), por lo que arribó a la edad mínima pensional de 57 años el mismo día y mes del año 2020, y además cuenta con 1.970 semanas cotizadas según la historia laboral actualizada a noviembre de 2019 aportada en la demanda, (documento 01 del expediente digital), por lo que reúne a cabalidad los requisitos legales establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de vejez.

De otra pare, respecto del disfrute de la prestación tendrá el mismo ocurre, a partir del día siguiente al que la demandante acredite ante Colpensiones su desafiliación del sistema pensional bien sea tácitamente desde su última cotización, o con el retiro expreso, como lo establece el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, el que estipula lo siguiente:

“La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.”.

En el prese caso está probado con la historia laboral actualizada a octubre de 2020 aportada con la respuesta a la demanda por PROTECCIÓN S.A., a folios 51 a 94 (documento 04 del expediente digital) que la demandante realizó su última cotización al sistema pensional en el mes de julio de 2020, en el que cotizó 21 días, por lo que le asiste derecho al disfrute de la pensión desde el 22 de julio de 2020, por lo que como la *a quo*, lo estableció que era a partir del día 21 de este mismo mes y año, la sentencia será modificada en este aspecto.

En relación con la liquidación del IBL, cabe recordar que el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, estableció que el IBL para liquidar la pensión de vejez, es el IBL del *“promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)*

años anteriores al reconocimiento de la pensión”. Esta norma también permite que ese ingreso base sea el promedio de lo cotizado en *“toda la vida laboral del trabajador”* siempre y cuando *“haya cotizado 1250 semanas”*, en ambos casos actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE; tesis que le es aplicable a la demandante, toda vez que cuenta con 1979 semanas cotizadas en toda su vida laboral.

Ahora, hechas las operaciones matemáticas de rigor por parte de la Sala, se encuentra que el IBL de toda la vida laboral corresponde a \$1'631.409, al que al calcularlo por un monto porcentual del 80%, da como resultado una mesada pensional de \$1'305.127.

De igual forma, se procedió a efectuar el cálculo de los últimos 10 años de cotización, encontrando que el IBL de los últimos 10 años asciende a \$1'802.058 y no a \$1'934.175, como lo señaló la juez de primera instancia, de manera que al aplicar la tasa de reemplazo del 80%, a la demandante le corresponde una mesada pensional de \$1'441.647, a partir del 22 de julio de 2020, conforme quedó explicado anteriormente, debiendo en este sentido modificar la sentencia de primera instancia.

Ahora, como la juez de instancia no adjuntó al acta de la liquidación efectuada respecto al cálculo del IBL, por lo que no es posible para esta Sala determinar en dónde se encuentra el error de liquidación, razón por la cual, seguidamente se transcribe el cálculo del IBL de los últimos 10 años así:

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
1-jul-10	31-jul-10	\$ 1.130.000	9	\$ 1.647.480	\$ 4.119	2019	103,80	2009	71,20
1-ago-10	31-ago-10	\$ 1.130.000	30	\$ 1.647.480	\$ 13.729	2019	103,80	2009	71,20
1-sept-10	30-sept-10	\$ 1.361.000	30	\$ 1.984.265	\$ 16.536	2019	103,80	2009	71,20
1-oct-10	31-oct-10	\$ 1.262.000	30	\$ 1.839.929	\$ 15.333	2019	103,80	2009	71,20
1-nov-10	30-nov-10	\$ 1.130.000	30	\$ 1.647.480	\$ 13.729	2019	103,80	2009	71,20
1-dic-10	31-dic-10	\$ 1.196.000	30	\$ 1.743.704	\$ 14.531	2019	103,80	2009	71,20
1-ene-11	31-ene-11	\$ 1.130.000	30	\$ 1.596.840	\$ 13.307	2019	103,80	2010	73,45
1-feb-11	28-feb-11	\$ 1.328.000	30	\$ 1.876.641	\$ 15.639	2019	103,80	2010	73,45
1-mar-11	31-mar-11	\$ 1.130.000	30	\$ 1.596.840	\$ 13.307	2019	103,80	2010	73,45
1-abr-11	30-abr-11	\$ 1.130.000	30	\$ 1.596.840	\$ 13.307	2019	103,80	2010	73,45
1-may-11	31-may-11	\$ 1.130.000	30	\$ 1.596.840	\$ 13.307	2019	103,80	2010	73,45
1-jun-11	30-jun-11	\$ 1.156.000	30	\$ 1.633.582	\$ 13.613	2019	103,80	2010	73,45
1-jul-11	31-jul-11	\$ 1.176.000	30	\$ 1.661.845	\$ 13.849	2019	103,80	2010	73,45
1-ago-11	31-ago-11	\$ 1.176.000	30	\$ 1.661.845	\$ 13.849	2019	103,80	2010	73,45
1-sept-11	30-sept-11	\$ 1.176.000	30	\$ 1.661.845	\$ 13.849	2019	103,80	2010	73,45
1-oct-11	31-oct-11	\$ 1.176.000	30	\$ 1.661.845	\$ 13.849	2019	103,80	2010	73,45
1-nov-11	30-nov-11	\$ 1.200.000	30	\$ 1.695.760	\$ 14.131	2019	103,80	2010	73,45
1-dic-11	31-dic-11	\$ 1.176.000	30	\$ 1.661.845	\$ 13.849	2019	103,80	2010	73,45
1-ene-12	31-ene-12	\$ 1.176.000	30	\$ 1.602.127	\$ 13.351	2019	103,80	2011	76,19
1-feb-12	29-feb-12	\$ 1.176.000	30	\$ 1.602.127	\$ 13.351	2019	103,80	2011	76,19
1-mar-12	31-mar-12	\$ 1.176.000	30	\$ 1.602.127	\$ 13.351	2019	103,80	2011	76,19
1-abr-12	30-abr-12	\$ 1.418.000	30	\$ 1.931.816	\$ 16.098	2019	103,80	2011	76,19

PROCESO ORDINARIO LABORAL
OLGA LUCÍA ZAPATA FRANCO Vs COLPENSIONES Y PROTECCIÓN S.A.
RADICADO: 05001-31-05-018-2020-00033-01

1-may-12	31-may-12	\$ 1.176.000	30	\$ 1.602.127	\$ 13.351	2019	103,80	2011	76,19
1-jun-12	30-jun-12	\$ 1.221.000	30	\$ 1.663.433	\$ 13.862	2019	103,80	2011	76,19
1-jul-12	31-jul-12	\$ 1.244.000	30	\$ 1.694.767	\$ 14.123	2019	103,80	2011	76,19
1-ago-12	31-ago-12	\$ 1.244.000	30	\$ 1.694.767	\$ 14.123	2019	103,80	2011	76,19
1-sept-12	30-sept-12	\$ 1.244.000	30	\$ 1.694.767	\$ 14.123	2019	103,80	2011	76,19
1-oct-12	31-oct-12	\$ 1.244.000	30	\$ 1.694.767	\$ 14.123	2019	103,80	2011	76,19
1-nov-12	30-nov-12	\$ 1.270.000	30	\$ 1.730.188	\$ 14.418	2019	103,80	2011	76,19
1-dic-12	31-dic-12	\$ 1.244.000	30	\$ 1.694.767	\$ 14.123	2019	103,80	2011	76,19
1-ene-13	31-ene-13	\$ 1.285.000	30	\$ 1.709.003	\$ 14.242	2019	103,80	2012	78,05
1-feb-13	28-feb-13	\$ 1.389.000	30	\$ 1.847.320	\$ 15.394	2019	103,80	2012	78,05
1-mar-13	31-mar-13	\$ 1.389.000	30	\$ 1.847.320	\$ 15.394	2019	103,80	2012	78,05
1-abr-13	30-abr-13	\$ 1.462.000	30	\$ 1.944.407	\$ 16.203	2019	103,80	2012	78,05
1-may-13	31-may-13	\$ 1.431.000	30	\$ 1.903.178	\$ 15.860	2019	103,80	2012	78,05
1-jun-13	30-jun-13	\$ 1.270.000	30	\$ 1.689.054	\$ 14.075	2019	103,80	2012	78,05
1-jul-13	31-jul-13	\$ 1.324.000	30	\$ 1.760.872	\$ 14.674	2019	103,80	2012	78,05
1-ago-13	31-ago-13	\$ 1.324.000	30	\$ 1.760.872	\$ 14.674	2019	103,80	2012	78,05
1-sept-13	30-sept-13	\$ 1.281.000	30	\$ 1.703.684	\$ 14.197	2019	103,80	2012	78,05
1-oct-13	31-oct-13	\$ 1.324.000	30	\$ 1.760.872	\$ 14.674	2019	103,80	2012	78,05
1-nov-13	30-nov-13	\$ 1.307.000	30	\$ 1.738.263	\$ 14.486	2019	103,80	2012	78,05
1-dic-13	31-dic-13	\$ 1.332.000	30	\$ 1.771.512	\$ 14.763	2019	103,80	2012	78,05
1-ene-14	31-ene-14	\$ 1.281.000	30	\$ 1.671.297	\$ 13.927	2019	103,80	2013	79,56
1-feb-14	28-feb-14	\$ 1.281.000	30	\$ 1.671.297	\$ 13.927	2019	103,80	2013	79,56
1-mar-14	31-mar-14	\$ 1.281.000	30	\$ 1.671.297	\$ 13.927	2019	103,80	2013	79,56
1-abr-14	30-abr-14	\$ 1.281.000	30	\$ 1.671.297	\$ 13.927	2019	103,80	2013	79,56
1-may-14	31-may-14	\$ 1.324.000	30	\$ 1.727.398	\$ 14.395	2019	103,80	2013	79,56
1-jun-14	30-jun-14	\$ 1.324.000	30	\$ 1.727.398	\$ 14.395	2019	103,80	2013	79,56
1-jul-14	31-jul-14	\$ 1.384.000	30	\$ 1.805.679	\$ 15.047	2019	103,80	2013	79,56
1-ago-14	31-ago-14	\$ 1.384.000	30	\$ 1.805.679	\$ 15.047	2019	103,80	2013	79,56
1-sept-14	30-sept-14	\$ 1.339.000	30	\$ 1.746.968	\$ 14.558	2019	103,80	2013	79,56
1-oct-14	31-oct-14	\$ 1.384.000	30	\$ 1.805.679	\$ 15.047	2019	103,80	2013	79,56
1-nov-14	30-nov-14	\$ 1.367.000	30	\$ 1.783.500	\$ 14.862	2019	103,80	2013	79,56
1-dic-14	31-dic-14	\$ 1.392.000	30	\$ 1.816.117	\$ 15.134	2019	103,80	2013	79,56
1-ene-15	31-ene-15	\$ 1.344.000	30	\$ 1.691.618	\$ 14.097	2019	103,80	2014	82,47
1-feb-15	28-feb-15	\$ 1.339.000	30	\$ 1.685.325	\$ 14.044	2019	103,80	2014	82,47
1-mar-15	31-mar-15	\$ 1.339.000	30	\$ 1.685.325	\$ 14.044	2019	103,80	2014	82,47
1-abr-15	30-abr-15	\$ 1.339.000	30	\$ 1.685.325	\$ 14.044	2019	103,80	2014	82,47
1-may-15	31-may-15	\$ 1.384.000	30	\$ 1.741.964	\$ 14.516	2019	103,80	2014	82,47
1-jun-15	30-jun-15	\$ 1.400.000	30	\$ 1.762.102	\$ 14.684	2019	103,80	2014	82,47
1-jul-15	31-jul-15	\$ 1.469.000	30	\$ 1.848.948	\$ 15.408	2019	103,80	2014	82,47
1-ago-15	31-ago-15	\$ 1.469.000	30	\$ 1.848.948	\$ 15.408	2019	103,80	2014	82,47
1-sept-15	30-sept-15	\$ 1.422.000	30	\$ 1.789.792	\$ 14.915	2019	103,80	2014	82,47
1-oct-15	31-oct-15	\$ 1.469.000	30	\$ 1.848.948	\$ 15.408	2019	103,80	2014	82,47
1-nov-15	30-nov-15	\$ 1.451.000	30	\$ 1.826.293	\$ 15.219	2019	103,80	2014	82,47
1-dic-15	31-dic-15	\$ 1.479.000	30	\$ 1.861.535	\$ 15.513	2019	103,80	2014	82,47
1-ene-16	31-ene-16	\$ 1.425.000	30	\$ 1.679.857	\$ 13.999	2019	103,80	2015	88,05
1-feb-16	29-feb-16	\$ 1.422.000	30	\$ 1.676.321	\$ 13.969	2019	103,80	2015	88,05
1-mar-16	31-mar-16	\$ 1.469.000	30	\$ 1.731.726	\$ 14.431	2019	103,80	2015	88,05
1-abr-16	30-abr-16	\$ 1.422.000	30	\$ 1.676.321	\$ 13.969	2019	103,80	2015	88,05
1-may-16	31-may-16	\$ 1.469.000	30	\$ 1.731.726	\$ 14.431	2019	103,80	2015	88,05
1-jun-16	30-jun-16	\$ 1.528.000	30	\$ 1.801.278	\$ 15.011	2019	103,80	2015	88,05
1-jul-16	31-jul-16	\$ 1.619.000	30	\$ 1.908.553	\$ 15.905	2019	103,80	2015	88,05
1-ago-16	31-ago-16	\$ 1.619.000	30	\$ 1.908.553	\$ 15.905	2019	103,80	2015	88,05
1-sept-16	30-sept-16	\$ 1.567.000	30	\$ 1.847.253	\$ 15.394	2019	103,80	2015	88,05
1-oct-16	31-oct-16	\$ 1.619.000	30	\$ 1.908.553	\$ 15.905	2019	103,80	2015	88,05
1-nov-16	30-nov-16	\$ 1.598.000	30	\$ 1.883.798	\$ 15.698	2019	103,80	2015	88,05
1-dic-16	31-dic-16	\$ 1.628.000	30	\$ 1.919.163	\$ 15.993	2019	103,80	2015	88,05
1-ene-17	31-ene-17	\$ 1.581.000	30	\$ 1.762.461	\$ 14.687	2019	103,80	2016	93,11
1-feb-17	28-feb-17	\$ 1.567.000	30	\$ 1.746.854	\$ 14.557	2019	103,80	2016	93,11

PROCESO ORDINARIO LABORAL
OLGA LUCÍA ZAPATA FRANCO Vs COLPENSIONES Y PROTECCIÓN S.A.
RADICADO: 05001-31-05-018-2020-00033-01

1-mar-17	31-mar-17	\$ 1.566.690	30	\$ 1.746.509	\$ 14.554	2019	103,80	2016	93,11
1-abr-17	30-abr-17	\$ 1.566.690	30	\$ 1.746.509	\$ 14.554	2019	103,80	2016	93,11
1-may-17	31-may-17	\$ 1.618.924	30	\$ 1.804.738	\$ 15.039	2019	103,80	2016	93,11
1-jun-17	30-jun-17	\$ 1.647.124	30	\$ 1.836.175	\$ 15.301	2019	103,80	2016	93,11
1-jul-17	31-jul-17	\$ 1.743.160	30	\$ 1.943.233	\$ 16.194	2019	103,80	2016	93,11
1-ago-17	31-ago-17	\$ 1.769.722	30	\$ 1.972.844	\$ 16.440	2019	103,80	2016	93,11
1-sept-17	30-sept-17	\$ 1.657.523	30	\$ 1.847.767	\$ 15.398	2019	103,80	2016	93,11
1-oct-17	31-oct-17	\$ 1.752.453	30	\$ 1.953.593	\$ 16.280	2019	103,80	2016	93,11
1-nov-17	30-nov-17	\$ 2.288.338	30	\$ 2.550.985	\$ 21.258	2019	103,80	2016	93,11
1-dic-17	31-dic-17	\$ 1.800.395	30	\$ 2.007.038	\$ 16.725	2019	103,80	2016	93,11
1-ene-18	31-ene-18	\$ 1.814.731	30	\$ 1.943.555	\$ 16.196	2019	103,80	2017	96,92
1-feb-18	28-feb-18	\$ 1.668.446	30	\$ 1.786.885	\$ 14.891	2019	103,80	2017	96,92
1-mar-18	31-mar-18	\$ 1.699.285	30	\$ 1.819.913	\$ 15.166	2019	103,80	2017	96,92
1-abr-18	30-abr-18	\$ 1.699.877	30	\$ 1.820.547	\$ 15.171	2019	103,80	2017	96,92
1-may-18	31-may-18	\$ 1.757.560	30	\$ 1.882.325	\$ 15.686	2019	103,80	2017	96,92
1-jun-18	30-jun-18	\$ 1.732.576	30	\$ 1.855.568	\$ 15.463	2019	103,80	2017	96,92
1-jul-18	31-jul-18	\$ 1.841.503	30	\$ 1.972.227	\$ 16.435	2019	103,80	2017	96,92
1-ago-18	31-ago-18	\$ 1.810.029	30	\$ 1.938.519	\$ 16.154	2019	103,80	2017	96,92
1-sept-18	30-sept-18	\$ 1.795.350	30	\$ 1.922.798	\$ 16.023	2019	103,80	2017	96,92
1-oct-18	31-oct-18	\$ 1.826.955	30	\$ 1.956.646	\$ 16.305	2019	103,80	2017	96,92
1-nov-18	30-nov-18	\$ 1.806.408	30	\$ 1.934.641	\$ 16.122	2019	103,80	2017	96,92
1-dic-18	31-dic-18	\$ 2.386.767	30	\$ 2.556.198	\$ 21.302	2019	103,80	2017	96,92
1-ene-19	31-ene-19	\$ 1.792.512	30	\$ 1.860.627	\$ 15.505	2019	103,80	2018	100,00
1-feb-19	28-feb-19	\$ 1.788.777	30	\$ 1.856.751	\$ 15.473	2019	103,80	2018	100,00
1-mar-19	31-mar-19	\$ 1.791.699	30	\$ 1.859.784	\$ 15.498	2019	103,80	2018	100,00
1-abr-19	30-abr-19	\$ 1.869.353	30	\$ 1.940.388	\$ 16.170	2019	103,80	2018	100,00
1-may-19	31-may-19	\$ 1.806.815	30	\$ 1.875.474	\$ 15.629	2019	103,80	2018	100,00
1-jun-19	30-jun-19	\$ 1.835.379	30	\$ 1.905.123	\$ 15.876	2019	103,80	2018	100,00
1-jul-19	31-jul-19	\$ 1.913.364	30	\$ 1.986.072	\$ 16.551	2019	103,80	2018	100,00
1-ago-19	31-ago-19	\$ 1.894.711	30	\$ 1.966.710	\$ 16.389	2019	103,80	2018	100,00
1-sept-19	30-sept-19	\$ 1.882.576	30	\$ 1.954.114	\$ 16.284	2019	103,80	2018	100,00
1-oct-19	31-oct-19	\$ 1.945.054	30	\$ 2.018.966	\$ 16.825	2019	103,80	2018	100,00
1-nov-19	30-nov-19	\$ 1.902.440	30	\$ 1.974.733	\$ 16.456	2019	103,80	2018	100,00
1-dic-19	31-dic-19	\$ 1.829.829	30	\$ 1.899.363	\$ 15.828	2019	103,80	2018	100,00
1-ene-20	31-ene-20	\$ 1.885.959	30	\$ 1.885.959	\$ 15.716	2019	103,80	2019	103,80
1-feb-20	29-feb-20	\$ 1.574.315	30	\$ 1.574.315	\$ 13.119	2019	103,80	2019	103,80
1-mar-20	31-mar-20	\$ 1.821.054	30	\$ 1.821.054	\$ 15.175	2019	103,80	2019	103,80
1-abr-20	30-abr-20	\$ 1.824.628	30	\$ 1.824.628	\$ 15.205	2019	103,80	2019	103,80
1-may-20	31-may-20	\$ 2.057.561	30	\$ 2.057.561	\$ 17.146	2019	103,80	2019	103,80
1-jun-20	30-jun-20	\$ 1.965.333	30	\$ 1.965.333	\$ 16.378	2019	103,80	2019	103,80
1-jul-20	31-jul-20	\$ 1.364.134	21	\$ 1.364.134	\$ 7.957	2019	103,80	2019	103,80

TOTAL DÍAS	3600
TOTAL SEMANAS	514,29

Ingreso Base de Liquidación -IBL-	\$ 1.802.058,45
Semanas Cotizadas	514,29
Tasa de reemplazo	80,00%
Valor pensión	\$ 1.441.647

La anterior liquidación de la pensión se realizó bajo los parámetros indicados por la Sala de Casación Laboral de a Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia 40552 de marzo 1º de 2011, es decir se tomó el promedio sobre lo cual cotizó el afiliado, durante los 10 años que anteceden al reconocimiento de la pensión, que equivale a 3.600 días, desde la última cotización del

accionante, y a partir de ella, se efectúa un conteo —retrocediendo en la historia laboral, hasta completar un lapso de los 10 años de tiempo cotizado, actualizando los ingresos base de cotización a la fecha de la pensión, con los IPC inicial y final de diciembre de cada año a liquidar y del año anterior a la liquidación de la pensión.

De igual forma, procede la Sala a actualizar el valor del retroactivo pensional, el que liquidado entre el 22 de julio de 2020 y el 31 de julio de 2023, asciende a **\$60'490.106**, conforme se ve en la siguiente tabla:

LIQUIDACIÓN RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	Valor Mesada	# Mesadas	Total retroactivo
2020	1,61%	\$ 1.441.647	6 mesadas y 9 días	\$ 9.082.376
2021	5,62%	\$ 1.464.858	13 mesadas	\$ 19.043.148
2022	13,12%	\$ 1.547.183	13 mesadas	\$ 20.113.373
2023		\$ 1.750.173	7 mesadas	\$ 12.251.210
			TOTAL	\$ 60.490.106

Finalmente, en cuanto a la inconformidad que presenta el apoderado de la parte demandante con respecto a la abstención de condena en costas de primera instancia a COLPENSIONES, considera la Sala no le asiste razón por cuanto, Colpensiones no tuvo ninguna responsabilidad en el traslado de régimen pensional del demandante, puesto que no era su obligación prestar la información debida al momento de la afiliación al RAIS, y además, tampoco era la entidad competente para resolver la solicitud de traslado del demandante debido a la prohibición legal de autorizar dicho traslado vía administrativa, concluyéndose entonces que la convocatoria de dicha entidad al presente proceso fue solo para que corriera con las consecuencias de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en el que no participó, sin que se les pueda exigir como lo plantea el apoderado de la actora que COLPENSIONES se allanen a la demanda o no la conteste oponiéndose a ella, pues esta entidad, no tiene por qué conocer si el traslado de la actora la RAIS, se produjo sin falta de la debida asesoría, y por ello será confirmada la abstención del juez de condenar en costas a COLPENSIONES.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia consultada será CONFIRMADA, MODIFICADA y PRECISADA en los términos anteriormente expuestos.

Sin COSTAS en esta instancia por haber sido vencidos todos los recurrentes en su apelación.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **PRECISAR** la sentencia del 24 de mayo de 2022 proferida por el JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **OLGA LUCIA ZAPATA FRANCO** contra **COLPENSIONES**, y **PROTECCIÓN S.A.**, en el sentido de que PROTECCIÓN S.A., debe devolver a Colpensiones la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como indexados los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole.

Igualmente se **MODIFICA** la sentencia de primera instancia, en el sentido que el disfrute de la pensión que se le reconoce a la actora a cargo de COLPENSIONES, es a partir del desde el 22 de julio de 2020, y que el monto de la pensión y el retroactivo pensional causado entre esta fecha y el 30 de junio de 2023, asciende a la suma de **\$60.490.106**, conforme la tabla de la parte motiva de ese fallo.

También, se **MODIFICA** la sentencia de primera instancia, en el sentido que en el evento que se hubiese pagado bono pensional tipo A, a favor de la demandante, la devolución del importe del mismo, debe efectuarse al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES. El importe de bono pensional distinto al tipo A, sí debe ser devuelto a COLPENSIONES.

En lo demás se CONFIRMA la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: Sin COSTAS en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ff3830ff6a6b83d08c6ecb3e6790f2698533ffa378aebb469a737d92556fb59c**

Documento generado en 02/08/2023 03:11:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>